



**VI Jornadas de Investigación Científica**  
*"15 años de la Facultad de Ciencias Sociales"*

**11 y 12 de setiembre de 2007**  
**URUGUAY**

**Inserción internacional,  
innovación y desarrollo  
¿Chile el camino a  
seguir?**

Cristina Zurbriggen

## INSERCIÓN INTERNACIONAL, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

### ¿Chile el camino a seguir?

Cristina Zurbriggen

*“Uruguay será el próximo Chile en materia de desarrollo y crecimiento económico porque tiene todas las condiciones para ello. Pero sólo lo logrará si, como país, se lo permite a sí mismo”* afirmó la prestigiosa revista internacional *The Economist* en su número publicado el 1º de febrero del 2007. Este artículo destaca varias similitudes que tienen ambos países, como sus sólidas democracias e instituciones públicas relativamente efectivas. Pero también se plantean importantes diferencias.

La principal, según *The Economist*, es que mientras Chile fue adelante con un fuerte proceso de apertura comercial, de libre mercado y de privatizaciones, *“Uruguay se ha quedado estancado en su democracia más igualitaria, pero de menor movilidad social”*. El artículo plantea que entre el dinamismo del mercado y el igualitarismo, el camino deseable para la sociedad uruguaya es escoger por el dinamismo chileno.

No hay duda que Chile, tiene hoy interés para América Latina por presentar un balance relativamente más positivo que el conjunto de los países de la región. Sin embargo, se torna relevante realizar un análisis desde un enfoque más abarcador, crítico y exigente que nos permitirá ver al proceso chileno poniéndolo en tensión con los cambios en América Latina y, comprender que aspectos de esta experiencia pueden tener significados más generales para la región.

La interrogante que surge es si la estrategia chilena es la mejor opción para América Latina. Y en consecuencia surgen otras preguntas: ¿el mercado por sí mismo ha garantizado el dinamismo económico?, ¿y la movilidad social?, ¿debe Chile seguir el mismo camino que ha seguido hasta ahora?, o ¿debe cambiar lo esencial del modelo o se le deben hacer ajustes al mismo?, ¿es posible desarrollar en el Chile actual una economía dinámica y justa, capaz de adaptarse a los patrones de crecimiento económico que privilegia la innovación y el conocimiento, en el marco de una economía globalizada?.

A partir de estas preguntas el presente artículo busca analizar la trayectoria chilena en las últimas dos décadas para colocarla en los debates sobre las estrategias de desarrollo. Una de las problemáticas más debatidas hoy, es como conciliar dinamismo económico y equidad; sobre la trilogía interdependiente compuesta por democracia-desarrollo económico-desarrollo social. Es a la luz de esa mirada, que se busca analizar los esfuerzos y las dificultades de América Latina, para adaptarse a los cambios del siglo XXI, construyendo sociedades capaces de reconstruir nuevas identidades que den lugar a mayor desarrollo económico y bienestar a sus ciudadanos.

### EL CAMINO CHILENO: APERTURA COMERCIAL, TLC Y AUGE EXPORTADOR

La sociedad chilena ha vivido un proceso de transición política a la democracia en paz que se abrió con el triunfo del plebiscito del 5 de octubre de 1988 y la victoria en la elección presidencial del candidato de la Concertación de Partidos para la Democracia, el 15 de diciembre de 1989. En esta nueva etapa, la acción de los gobiernos de la Concertación siguieron la estrategia de desarrollo centrada en el mercado y poniendo fuerte énfasis en la apertura comercial. Sin embargo, la

trayectoria seguida por los partidos gobernantes marcan una diferencia con el modelo dictatorial, al mismo tiempo que se trataban de consolidar el crecimiento de una economía abierta, se emprendía una redistribución de los ingresos y se fomentaban programas sociales para mejorar las condiciones de vida, asegurar la estabilidad social y ampliar los mercados internos.

La apertura de la economía y la firma de tratados de libre comercio ha sido una estrategia fundamental de Chile durante las últimas décadas. A diferencia de Uruguay, el país andino contó históricamente con sucesivos gobiernos que apoyaron dicho camino. Así tuvo lugar un esfuerzo explícito y sistemático de las autoridades de ampliar mercados y generar condiciones para un aumento del comercio a partir de la firma de acuerdos de libre comercio, asociación económica y otros instrumentos para la facilitación del intercambio de bienes y servicios. Esta estrategia iniciada en la dictadura, se continuó con la restauración democrática, y durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) se firmaron acuerdos significativos con Estados Unidos, la Unión Europea, EFTA, China e India. La intensidad de la actividad comercial chilena, en el período 1990-2005, se expresa en la firma de 2 acuerdos de asociación económica,<sup>1</sup> 11 tratados de libre comercio<sup>2</sup>, 6 acuerdos de complementación económica<sup>3</sup>, 38 acuerdos de protección a las inversiones, 16 acuerdos de doble tributación, y 38 acuerdos aerocomerciales para la facilitación del tránsito de bienes, servicios y personas (Fuentes, 2007).

La adopción de esta estrategia le permitió a Chile obtener un excelente desempeño económico entre los años 1988 y 1997, logrando un crecimiento promedio anual de 5% del PBI entre 1990-2005. La inversión extranjera en el año 2006 alcanzó la cifra de US\$ 8.056 millones, ocupando el tercer lugar en América Latina, luego de México y Brasil. Mientras que las inversiones directas en el exterior también fueron relevantes, ocupando Chile nuevamente el tercer lugar, luego de Brasil y México (CEPAL, 2006). En el año 1997, el intercambio comercial representaba el 18 % del PBI, mientras en 2005, alcanza la cifra de 26,5%. En el mismo año, Chile fue elegido por el Foro Económico Mundial como el país más competitivo de América Latina y el Caribe, enfatizándose la "excelente gestión macroeconómica" y el "destacado nivel de competencia de las instituciones públicas".

En el éxito obtenido por el país andino se destaca la importancia que han tenido las condiciones externas, considerando los favorables términos de intercambio, y el acceso al financiamiento extranjero, incluyendo inversión extranjera directa (IED), así como también la clara estrategia de liberalización del comercio reflejada en una reducción gradual de los aranceles y de las barreras para arancelarias desde los comienzos de los setenta, complementada con la implementación de políticas selectivas de incentivo a la producción y a la competitividad del sector agroindustrial para posicionarse en el mercado internacional.

Uruguay, por el contrario, ha tenido un tímido desempeño comparado con Chile, sufrió una fuerte crisis financiera y recesión en los años 2002-2003. Desde entonces el país se ha recuperado y *"está a un solo paso del camino chileno"*, señaló la revista *The Economist*. El 25 de enero del 2007 firmó un acuerdo marco de comercio e inversiones con los EEUU, lo cual supone el primer paso hacia un acuerdo de libre comercio.

---

<sup>1</sup> Chile firmó Acuerdos de Asociación Económica con la Unión Europea (2002) y con el llamado P-4 (Nueva Zelanda, Singapur, Brunei Darussalam y Chile) el 2005.

<sup>2</sup> Chile firmó TLC con Canadá (1996), México (1998); Centroamérica (1999); Corea del Sur (2003), EFTA (2003); Estados Unidos (2003); China (2005), Panamá (2006), Perú (2006), Colombia (2006) y Japón (2007).

<sup>3</sup> Chile firmó Acuerdos de Complementación Económica con Bolivia (1993), Venezuela (1993), Cuba (1998), Ecuador (1994), MERCOSUR (1996), India (2006).

Con todo, dos problemas detienen el crecimiento de Uruguay, según la revista *The Economist*. En primer lugar, su pertenencia al MERCOSUR, donde los esquemas de integración no se están constituyendo en plataforma de aprendizaje para exportar a terceros mercados, ni en negociaciones efectivas con grandes socios, tal cual rezaba el predicamento de integrarse para reforzar el poder negociador con economías industrializadas. En segundo lugar, la dificultad de lograr un consenso político interno para definir una clara estrategia de inserción internacional. *The Economist* afirma que el ministro de Economía, Danilo Astori, es un moderado al estilo de la coalición de centro-izquierda que gobierna Chile. Pero "*el gobernante Frente Amplio también incluye a poderosos sindicatos y socialistas de vieja línea*". En esta coyuntura el presidente Tabaré Vázquez ha tenido que maniobrar entre una y otra línea según la ocasión.

No es de extrañar entonces, que de un análisis comparado sobre la temática, Chile surja claramente como caso exitoso de inserción internacional. Sin embargo, habría que preguntarse si la estrategia de desarrollo seguido por Chile le está permitiendo ingresar a los mercados más dinámicos, permitiéndolo generar capacidades para fomentar un perfil exportador especializado en productos con alto valor agregado y potencialidades tecnológicas.

## **¿QUÉ ES DINAMISMO?**

La economía chilena está mostrando sus límites. La brecha de ingresos sigue siendo considerable en relación a los países de la OCDE. Actualmente, el ingreso per cápita de Chile (ajustado a paridad del poder de compra) es menos de 40% del promedio de los países de la OCDE y menos de 30% del de Estados Unidos, lo cual deja mucho espacio para seguir cerrando la brecha en los niveles de vida relativos.<sup>4</sup> Se puede anticipar que las mayores ganancias de largo plazo tendrán su origen en la acumulación de capital humano, el área en que Chile se encuentra más atrasado, al igual que resto de los países de América Latina.

En el mundo actual las economías más dinámicas y que más crecen son aquellas que han apostado a sectores más intensivos en tecnología y conocimiento (OECD, 2001; ONUDI, 2005; Lall 2004; Singh, 2006; Rodrik 2005; Ocampo, 2005). La Nueva Economía basada en el conocimiento se define como aquella "en la que la generación y explotación del conocimiento juegan un papel predominante en la creación de bienestar" (OECD, 1997).

Sin embargo, América Latina, y Chile no es una excepción, continúan con su especialización en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. En el año 1970, el 50% de PBI, en América Latina, era explicado por los recursos naturales. Treinta años después, el panorama no cambió mucho: un 51% del PBI es explicado por sectores intensivos en recursos naturales, en tanto, los sectores intensivos en conocimientos aumentan un poco, pasando de representar el 21% al 28%. Ello muestra un rezago considerable con relación a los países desarrollados y también con relación a países emergentes del Sudeste Asiático, donde los sectores intensivos en conocimiento llegan a representar en muchos países más del 60% del PBI (CEPAL, 2006).

---

<sup>4</sup> El crecimiento económico de la región, en el 2006, no recupera los niveles de alcance logrados antes de la década de los ochenta. A pesar de los esfuerzos de estabilización entre los que se incluye la promoción de exportaciones y la aplicación de planes de ajuste macroeconómico, el crecimiento del ingreso real per cápita de la región presenta un rezago respecto al del Sudeste Asiático (1,5% vs. 4,8% anual durante 1965-2004) Según *World Development Indicators*, Banco Mundial (2006).

Según el Banco Central del país andino, en 2005 los productos alimenticios, materiales crudos, aceites, grasas y metales no ferrosos constituyen casi el 85% de las exportaciones. De esta forma la economía termina dependiendo (al igual que en el resto del continente) de los precios internacionales de los productos exportados; en el caso de Chile se acentúa por la alta proporción del cobre en sus exportaciones. Por su parte, el TLC firmado con China si bien es visualizado por el gobierno y algunas analista como un mecanismo importante de crecimiento, atracción de inversiones y desarrollo, el mismo refuerza el modelo agroexportador del país. En los bienes con destino a China encontramos cobre, hierro, vino, frutas, salmón, además de productos forestales, celulosos, agrícolas y ganaderos entre otros. Pero lo opuesto sucede con la nómina de los productos que los chilenos compran a China: artículos electrónicos, maquinarias y automóviles encabezan la lista.

En este contexto, no es de extrañar que la inversión de I+D en Chile -la medida más usual de la innovación- es comparativamente baja, alrededor de 0,7% del PIB en 2002. El caso de Uruguay es todavía peor, la inversión en I+D llega al 0,22% del PBI. Asimismo no es sorprendente que la baja inversión de I&D se refleje en un desempeño relativamente pobre en cuanto a innovación, por lo menos si ésta se mide por los indicadores básicos utilizado para analizar el desempeño de los países (véase cuadro 1).

**Cuadro N°1 Indicadores básico de desempeño de algunos países de la región en I&D**

	Inversión/PBI 1	Inversión /Hab 2	Inver/In vestig.3	Patente s Res.4	Tasa Depen 5.	Pub.SCI 6	Pub. SCI/h ab.7	Pub.SCI I /invest. 8
Argentina	0,39	9,86	13,86	1.062	5,2	5581	15,2	21,4
Brasil	1,04	36,67	96,62	10.002	1,4	15.854	9,1	20,0
Paraguay	0,10	0,98	11,93	10	25,1	36	0,7	7,9
<b>Uruguay</b>	<b>0,22</b>	<b>9,59</b>	<b>26,09</b>	<b>34</b>	<b>17,3</b>	<b>398</b>	<b>11,8</b>	<b>32,0</b>
<b>Chile</b>	<b>0,70</b>	<b>26,72</b>	<b>55,89</b>	<b>407</b>	<b>8,0</b>	<b>2655</b>	<b>17,6</b>	<b>36,7</b>
Costa Rica	0,39	17,75				278	7	
México	0,39	24,84	95,26	526	23,8	5995	5,9	22
España	1,03	162,35	81,51	3464	46,4	28409	67,9	34,1
Canadá	1,88	440,31	133,57	5737	16,2	40513	129	37,9
EEUU	2,64	960,03	217,42	164,795	0,8	331538	115,1	25,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de RICYT 2003

1. Inversión en I+D como porcentaje del PBI
2. Inversión en I+D por habitante, en U\$\$
3. Inversión en I+D por investigadores equivalente a jornada completa (Ejc)
4. Solicitudes de patentes por residentes en el país.
5. Tasas de Dependencia: relación entre solicitudes de patentes de no residentes y residentes
6. Publicaciones en Science Citation Index (SCI) Search
7. Publicaciones en SCI Search por cada 100.000 habitantes.
8. Publicaciones en SCI Search por cada 100 investigadores EJC

Esto estaría mostrando, los límites de la política comercial como garante de la competitividad y la necesidad de dar un fuerte impulso a la innovación y a la educación como dinamizadores de la economía. Por lo tanto, la lección que se aprende de esta experiencia es que los tratados de libre comercio facilitan el acceso a mercados, pero

no aseguran que las economías puedan generar competitividad en los mercados más dinámicos. Chile debería estimular la innovación como base de una diversificación de su estructura productiva. Los ejemplos son conocidos. Finlandia, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda o Corea (Foxley, 2006; Rosales, 2006).

Por lo tanto, el potencial de capacidad de Chile para crecer en el futuro se halla obstaculizado específicamente por su débil posición tecnológica. Inciden también la insuficiente generación y transferencia de conocimiento técnico, el reducido número de científicos e ingenieros que trabajan en investigación y desarrollo. La pequeña cantidad de investigadores que egresan anualmente de programas de doctorado o se forman en ese nivel en universidades en el extranjero, la limitada inversión pública y privada en ciencia y tecnología. Asimismo, la política de innovación está formulada e implementada de manera fragmentada, con una multiplicidad de fondos para la entrega de apoyo gubernamental, los mercados de capital de riesgo son relativamente subdesarrollados, entre otros tantos factores que dificultan la innovación (OCDE, 2005; Informe del Consejo de Innovación Chileno, 2006).<sup>5</sup>

En consecuencia, hay brechas significativas que Chile necesita superar en el camino hacia el desarrollo pero que, al mismo tiempo, actúan como trabas para el crecimiento que deben ser removidas lo antes posible. Ello implica un gran desafío para el Estado actual que tiene que diseñarse y organizarse para la sociedad de la información y el conocimiento, en el marco de la globalización (PNUD, 2006). Además, es un Estado que emerge de las reformas neo-liberales con una serie de fracturas que han debilitado su capacidad de acción: la ruptura más importante es entre el Estado y la sociedad civil, pero también se trata de un Estado con menos instrumentos de acción directa y menos soberanía frente a la sociedad y la economía internacional. El Estado nacional ha perdido capacidad financiera para sustituir a la inversión privada. Por otra parte, una estrategia nacionalista que intente prescindir del capital privado transnacional podría responder a legítimos objetivos nacionales, pero el costo podría ser intolerable en términos de estancamiento económico (Muñoz, 2007).

Podemos concluir como afirma Castells que la lección que se aprende de la estrategia seguida por Chile es que la apertura por sí misma no ha llevado a mayores capacidades tecnológicas locales. Por lo que se hace necesario fortalecer y articular la política de ciencia, tecnología e innovación, formación de capital humano, mejorar los sistemas nacionales de innovación, políticas de fortalecimiento de la relación entre apertura comercial y cambio tecnológico, entre otros aspectos.

A partir de sus estudios previos de los casos de Silicon Valley y Finlandia, Castells (2005) plantea 4 tareas pendientes en Chile, válidas también para toda América Latina:

En primer lugar, el centro del proceso de desarrollo se sitúa en la capacidad del sistema de innovación de un país. Cuanto más alejado de la vanguardia de la innovación está un país (como es el caso de Chile y como fue el caso de Finlandia hasta la década de los noventa) más importante es la acción institucional en la generación de mecanismos de innovación.

En segundo lugar, la calidad de las universidades y la efectividad de sus mecanismos de articulación con las empresas son esenciales no basta que haya excelencia universitaria. Es necesaria una articulación entre universidad, empresa y administración. Y cuando no existe, es necesario inducirla.

---

<sup>5</sup> Véase el Informe Final elaborado por Consejo Nacional de la Innovación para la Competitividad (2006) [www.consejodeinnovacion.cl](http://www.consejodeinnovacion.cl)

En tercer lugar, la importancia de los recursos humanos en la economía de la sociedad del conocimiento se traduce en la importancia de la educación y de las condiciones de vida de los trabajadores como fuente de trabajo productivo.

En cuarto lugar, la lección fundamental proviene del modelo finlandés: el círculo virtuoso entre un Estado de bienestar orientado a la productividad y una economía productiva que puede pagar un Estado de bienestar en expansión. Esa es la frontera en donde el modelo chileno de desarrollo puede o debiera pasar, de ser liberal a ser solidario, sin por ello perder competitividad. Productividad como producto de la calidad de vida de la población y de la capacidad de una población culturalmente desarrollada para encontrar nuevas formas y campos de innovación. Lo esencial en este sentido es la transformación tecnológica y organizativa del sector público como base de productividad en la sociedad de la información en el Estado de bienestar. (Castells, 2005; 108-110). Ello nos conduce a la siguiente pregunta.

### **¿IMPORTA LA DESIGUALDAD?**

Un segundo desafío que se plantea es si es posible pensar en un Chile creciendo combinado con un modelo más equitativo de distribución de la riqueza. ¿Crecimiento o protección social?. Una falsa disyuntiva ¿se puede crecer con desigualdad?, ¿cómo afecta la desigualdad el dinamismo económico?.

Tal como sugiere Castells (1999), el modelo de desarrollo chileno no coincide plenamente con la mirada convencional que lo cataloga como el caso más destacado de aplicación del recetario neoliberal. El éxito económico y político de Chile ha generado un modelo, el denominado "el modelo chileno". En efecto, Chile ha sido considerado el "modelo por excelencia para los ideólogos del libre comercio" de casos de transición exitosa a una nueva estrategia de crecimiento basado en las exportaciones; no obstante, dicha percepción olvida que "el desarrollo chileno, mezcló de modo secuencial dos modelos de crecimiento muy diferentes": uno, el de Pinochet, denominado *autoritario liberal excluyente* y el segundo impulsado por los gobiernos democráticos a partir de 1990, calificado como *democrático liberal incluyente* (Castells, 1999, 152).

*Ambos comparten el calificativo de liberal por el énfasis que ambos modelos ponen en el mercado y en la apertura económica internacional como elementos esenciales del crecimiento económico. Pero naturalmente las otras dos dicotomías que caracterizan los modelos (autoritario/democrático y excluyentes/incluyente) los hacen profundamente distintos, no solo política o éticamente, sino también económicamente y operativamente. El modelo dictatorial fue un modelo de desarrollo excluyente "de los beneficios del crecimiento a gran parte de la población mediante el ejercicio autoritario e incontrolado del poder del Estado, al tiempo que prioriza los mecanismos de mercado sobre los valores de la solidaridad social, sin aplicar políticas públicas correctoras de las desigualdades y de los privilegios de las elites sociales y económicas"*

Mientras que por modelo democrático liberal incluyente se refiere a "un modelo de desarrollo gestionado a partir de un Estado democrático resultante de la libre elección de los ciudadanos y que aún manteniendo los mecanismos de mercado como forma esencial de asignación de recursos, implementa políticas públicas encaminadas a la inclusión del conjunto de la población a los beneficios de crecimiento, en particular

*mediante una política fiscal redistributiva<sup>6</sup> y en esfuerzo creciente de políticas públicas en la mejora de las condiciones de vida de la población a través de la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura de servicios, los equipamientos sociales y culturales, las ayudas y subsidios a las personas necesitadas”.*

Por lo tanto, Chile ha transitado desde un modelo económico de dominio incontrarrestable de la agenda neoliberal a un modelo híbrido, donde la agenda social ha sido la contracara de los gobiernos democráticos. Como reza un lema histórico de la coalición gobernante, se ha tratado de articular “crecimiento con equidad” o “desarrollo con igualdad”. Otra cosa es que lo haya logrado adecuadamente, de ahí que resulte tan fácil adherir a la posición convencional que sigue viendo en el país trasandino el arquetipo del régimen de mercado en la región.

En cifras, durante los 4 años del gobierno de Aylwin los salarios reales se incrementaron un 4% anual, el salario mínimo se incrementó en 24% (Castells, 1999; Ffrench Davis y Stalling, 2001) y comenzó el paulatino proceso de disminución de la pobreza desde el 45% con se inicia la década hasta llegar a las cifras actuales, de 13,7% según los datos de la última encuesta Casen, en el año 2006<sup>1</sup>

En este proceso, las políticas sociales han tenido un importante impacto en el mejoramiento de los ingresos real total de los hogares del 50% de la población, en especial los deciles en que se inscribe la pobreza y la indigencia.

El Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2002 muestra cambios significativos, entre ellos: la mejora del nivel de vida del 20% más pobre de la población, en términos de vivienda<sup>7</sup>, infraestructura básica de la población, trabajo, alimentación, lo que estaría produciendo un importante cambio en el nivel de vida de los estrato sociales más bajos de la población. Con otras palabras, el éxito económico permitió aumentar el bienestar de las ciudadanos, traducido en saneamiento de los finanzas públicas que permitió elevar el gasto público y social en infraestructura, el crecimiento de los niveles y remuneraciones reales y del consumo de los hogares, junto a creciente formalización del mercado laboral, la reducción de la pobreza y la expansión del consumo, aunque permanecen muchas brechas en relación a las oportunidades y posibilidades de una mejor vida material que la del resto de la población.

Este mejoramiento del bienestar no hubiera sido posible sin una estrategia distributiva de los gobiernos de la Concertación basada en cuatro grandes orientaciones: a) redistribuir el ingreso al margen del mercado mediante el gasto social pública; b) focalizar el gasto público en los grupos más pobres mediante subsidios monetarios y no monetarios; c) elevar la oferta de bienes públicos asociados a la regulación económica creciente y al conjunto de la política económico, como son la educación, salud, recreación entre otros, d) aumentos progresivos del ingreso mínimo real y de la

---

<sup>6</sup> Hay que tener presente que Castells escribió su libro en el año 1999 por lo que no pudo evaluar el gobierno de Aylwin, ni los posteriores Frei y Lagos. El gobierno de Aylwin efectivamente hizo una reforma tributaria subiendo el impuesto a las utilidades de las empresas y el IVA para financiar el gasto social. Las otras dos “microreformas” tributarias son del gobierno de Frei, elevando impuestos específicos para financiar el gasto social. El presidente Lagos utilizó el mismo expediente además del incremento en un punto del IVA. Con todo, sólo recientemente ha tomado cuerpo la discusión sobre la política fiscal y tributaria como base para sostener el cambio en el enfoque de política social donde como se ve, se avanza desde políticas focalizadas a una perspectiva más universalistas, en clave régimen de bienestar incipiente.

<sup>7</sup> En 2002, el 90,7 por ciento de la población vive en residencias que satisfacen estándares básicos de calidad. También mejoró el acceso a servicios de infraestructura básica, tales como electricidad, agua potable, alcantarillado, ducha y combustible y ducha para cocinar. Véase Larrañaga (2003).



asignación familiar para los grupos de más bajos ingresos, junto a los programas públicos de empleo (Vega, 2007; 181-182).

Sin embargo, al mismo tiempo tuvo lugar una importante privatización de las políticas sociales, como la salud, los servicios de previsión social,<sup>8</sup> la educación<sup>9</sup> que ha impactado en la inequidad. En Chile, al igual que Estados Unidos, el gasto en salud representa el 5 por ciento del presupuesto de familiar de los hogares. Este presupuesto es alto en comparación los niveles internacionales. Chile tiene también altos estándares de privatización del sistema de pensiones generando grandes inequidades sociales.

De acuerdo a estudios gubernamentales realizados por Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional publicado en el año 2006, dos de cada tres afiliados al sistema previsional privado nunca van a acumular los fondos requeridos para financiar siquiera una pensión mínima, actualmente en US\$150 mensuales. Por su parte, el Estado mantiene una red de protección mínima, consistente en una pensión no contributiva, denominada asistencial -actualmente en US\$ 80 al mes-; sin embargo, es necesario demostrar indigencia, y aun así, a veces esperar años para recibirla. Por otra parte, quienes jubilan actualmente por AFP perciben pensiones que por lo general son menos de la mitad de aquellas percibidas por sus colegas que lograron permanecer en el antiguo sistema de reparto. Las mujeres resultan especialmente perjudicadas por la baja tasa de reemplazo. En cambio, resultan beneficiados con pensiones superiores a la pensión pública tope, actualmente en US\$1.600 mensuales, quienes han cotizado regularmente por el salario tope y adicionalmente han realizado ahorro previsional voluntario en las AFP, el cual es compensado íntegramente por importantes franquicias tributarias. El costo para el fisco de estas últimas, sin embargo, es equivalente al doble del gasto en pensiones asistenciales, y favorece a un número exiguo de los afiliados (CAPRP 2006).

El mismo patrón de privatización se aprecia en la educación, Chile es uno de los países del mundo donde el sector privado tiene una mayor participación. Los hogares chilenos se hacen cargo del 5,9%, en tanto en España es menor a 1% por ciento, y de 100 pesos gastos en educación, 43 provienen de los hogares (Tironi, 2005). Por otra parte, más de la mitad del gasto privado se concentra en los colegios particulares no subvencionados, que atienden solo a un 8% de los niños, que provienen de las familias más adineradas, y en las universidades, donde la cobertura en el quintil de mayores ingresos es superior al 70%, similar a los promedio general de países desarrollados, mientras no llega al 10% en los quintiles más pobres.<sup>10</sup> Otro dato relevante, es que Chile destina hoy sólo el 14% del presupuesto educacional al nivel terciario, proporción similar a que destinaba hace treinta años, mientras los países de la OCDE destina el 24% a este nivel, con varios países superando el 30% y hasta el 40% (CAPCE 2006).

Si bien ha habido un aumento de la cobertura de la educación de todos los niveles, incluyendo los más pobres del primer quintil, dicho proceso no ha sido acompañado con un mejoramiento de la calidad de la misma, estableciendo desigualdades originadas entre los niños y jóvenes por su condición social. Pero el principal problema

---

<sup>8</sup> Véase Informe elaborado por Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (CAPRP), 2006.

<sup>9</sup> Véase Informe elaborado por Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (CAPCE), 2006.

<sup>10</sup> La evidencia empírica para una muestra de países sugiere que un aumento en el desempeño educacional de Chile (medido por puntajes en pruebas internacionales estandarizadas) al nivel de los mejores niveles internacionales (esto es, aquellos países en el diez por ciento más alto de la distribución mundial incluyendo, por ejemplo, a Corea del Sur) aumentaría el crecimiento anual en 1,5 puntos porcentuales.

de la educación chilena es, sin dudas, la aún baja inversión pública. Esto afecta primordialmente a la población que no cuenta con recursos propios para financiar la educación. Con esto, un instrumento con la educación que estaba destinada a reducirla la desigualdad, no hace más que reproducirla. Ello se refleja en los resultados de la prueba de medición de calidad de la enseñanza, publicado en el año 2004 (SIMCE)<sup>11</sup>. Los alumnos provenientes de hogares de altos ingresos obtuvieron 317 puntos en lenguaje y 347 en matemática; los de hogares de bajos ingresos, en cambio, alcanzaron apenas 226 y 215 puntos en las pruebas respectivamente (Tironi, 2005, 257).

La desigualdad sigue siendo el talón de Aquiles de la estrategia chilena. Los sucesivos gobiernos no mejoraron la distribución del ingreso nacional disponible, si bien han tenido importantes logros en la reducción de la pobreza o de carencias relativas a la satisfacción de sus necesidades sociales básicas. Con respecto a la participación en la distribución del ingreso, Chile se caracteriza por una profunda desigualdad que se ha mantenido durante todo el período 1990-2003. Los grupos de más altos ingresos, el 10% de la población se apropian del 41% del ingreso autónomo de los hogares.

En resumen, los grandes cambios que ha experimentado la sociedad chilena ha permitido un mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más pobre de la sociedad, aumentando sus niveles de ingresos, consumos y acceso a servicios, aunque las desigualdades se mantienen. Sin embargo, las distancias económicas entre los distintos grupos de ingresos de la población han ido aumentando con el proceso de crecimiento de la población y la permanencia de una distribución de los ingresos muy desigual. Chile tiene hoy desafíos de envergadura en materia de educación, empleo, previsión e innovación tecnológica. Son justamente aquellas áreas donde las políticas del nuevo Gobierno pueden hacer una diferencia en dar mayor dinamismo a nuestra economía y convertir a Chile en una sociedad más justa.

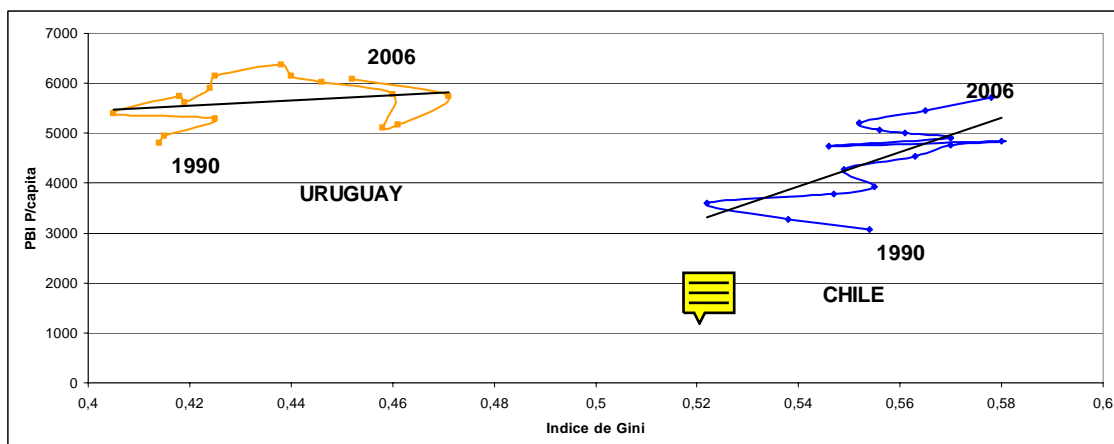
En la siguiente gráfica se visualiza que las desigualdades sociales, medidas a través de Índice de Gini se han incrementado no sólo en Chile, sino también en Uruguay (corregir con el último dato) En el caso chileno la pendiente acentuada de la trayectoria muestra que el aumento de la desigualdad fue acompañada de un fuerte crecimiento económico. En Uruguay, en cambio, la curva es prácticamente horizontal, indica que se incrementó la desigualdad en un porcentaje similar al chileno pero sin que ello fuera acompañado por un crecimiento sustantivo del PBI per cápita. En el caso de Uruguay, si bien en términos comparativos con América Latina muestra mejores indicadores, los problemas de pobreza se han agudizado en los últimos años y el aumento de la inequidad social muestra signos preocupantes<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) funciona en base a una prueba que se aplica a nivel nacional, una vez al año, a todos los alumnos del país que cursan un cierto nivel, lo cual va alternándose.

<sup>12</sup> Según datos de la CEPAL en el 2005 América Latina tenía 40.6% de su población sumergida en la pobreza. Mientras Uruguay, Chile y Costa Rica obtenían los indicadores más bajos (15.4%, 18.8% y 20.3% respectivamente).

**Gráfico N°1 Trayectoria de la variación de la relación entre el Índice de Gini y el PBI per cápita de Chile y Uruguay**



Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL

Si Uruguay mira con simpatía a Chile, se debería preguntar que hacer acerca de qué cosas entran en contradicción con una preocupación por la equidad de la sociedad uruguaya. Entonces, habría que mantener las políticas macroeconómicas, cambiar la inserción internacional del país. Sin embargo, ¿ello es suficiente para lograr un desarrollo sostenible?, ¿cuáles son los costos en materia de equidad social?, ¿se pueden privatizar las políticas sociales?

En el fondo de la discusión está los límites de la estrategia de desarrollo chileno para lograr crecimiento con equidad. El hecho central y más determinante de las características que asuma el crecimiento económico futuro debe ir acompañado con desarrollo económico y social. Ello nos conduce a la siguiente pregunta.

**¿DEBE CHILE SEGUIR EL MISMO CAMINO QUE HA SEGUIDO HASTA AHORA?**

Las actuales autoridades han dicho que no<sup>13</sup>. Este debate se torna relevante luego que en la campaña presidencial de 2005 los candidatos a la presidencia estuvieron de acuerdo que el modelo chileno tenía que introducir cambios para avanzar a una mayor justicia social. Esto, no sólo fue planteado por la actual presidenta, sino también dentro de la propia concertación, incluido el partido “menos izquierdista”, la Democracia Cristiana. Su entonces presidente, Adolfo Zaldívar, habló de “corregir el modelo”.

Por otro lado, un representante empresarial bastante connotado, como Felipe Larraín (ex presidente de uno de los mayores holdings de Chile, la petrolera y forestal COPEC) manifestó que “el modelo económico chileno debe ser cambiado”. Aún más, la coalición de derecha opositora: Alianza Por Chile -que tradicionalmente había criticado a la concertación por su “excesiva” intervención estatal- también señaló la relevancia de la dimensión social y la redistribución de la riqueza.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ello se expresa en los siguientes informes del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (CAPRP-2006), del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (CAPCE), y del Consejo Nacional de Innovación (2006).

<sup>14</sup> Es importante mencionar que el cuestionamiento a la estrategia de desarrollo seguida por Chile ya se manifestó anteriormente en publicaciones anteriores. Entre ellos podemos mencionar el Informe del PNUD (2002), el libro de Sonia Montecinos (2003), *Revisando a Chile*, publicada en el marco de la Comisión del Bicentenario, o el Eugenio Tironi (2005) *El sueño Chileno*.

Ya el programa de Michelle Bachelet relevaba la noción de protección social como vector de su gobierno. Partía de un precedente muy relevante: el gobierno de Lagos (2000-2006) había impulsado una reforma de la salud que ponía en el centro la noción de los ciudadanos como sujetos del derecho a la salud garantizado por el estado, recuperando la vieja noción del *welfare state* de prestaciones universales<sup>15</sup>. El programa estrella de la reforma de la salud es el así llamado Plan AUGE (Atención Gratuita por Garantía Explícitas de salud), el cual, en una secuencia creciente, ha ido garantizando el acceso de los pacientes a un conjunto de patologías prioritarias<sup>16</sup>.

En esa dirección, las reformas emprendidas por Bachelet apuntan a reforzar sustantivamente la presencia del Estado allí donde el mercado ha sido claramente insuficiente: a) reforma previsional, para garantizar una pensión mínima de US\$150 a cada persona mayor de 65 años, con lo cual adquiere carácter de universal superando el sistema puramente contributivo; b) reforma educacional: creación de nuevas reglas del juego con fuerte fiscalización del estado en la provisión de servicios educativos tanto en educación general como preescolar; c) universalización de las prestaciones en salud (ampliando las patologías con cobertura garantizada desde las actuales 56 a 80 el año 2010); y c) fortalecimiento del sistema nacional de innovación.

El modelo de crecimiento económico que ha orientado las políticas públicas de los gobiernos de la Concertación está en debate, y es posible plantearse como tarea y desafío, para construir una sociedad más justa. Este nuevo Estado enfrenta situaciones inéditas y otras que, siendo de antigua data, emergen con nuevas características. La economía de mercado se ha fortalecido y extendido a ámbitos insospechados, los que, durante la mayor parte del siglo XX, pertenecieron a la esfera pública, como la seguridad social, la salud, la educación y la capacitación, la construcción de obras públicas. Esto le alivia la tarea al Estado, por una parte, en cuanto hay bienes públicos cuya oferta puede ser asumida por el sector privado, con las debidas regulaciones, pero estas son ahora más complejas porque deben realizarse "a la distancia", a través de sistemas de incentivos, más que por la vía de intervenciones y controles directos (Muñoz, 2007).

## **CRECIMIENTO O DESIGUAL ¿CÓMO SUPERAR EL DILEMA?**

Chile se ha destacado en el contexto latinoamericano por la definición de una clara estrategia de inserción en el contexto internacional. El buen desempeño económico y la reducción de la pobreza, en relación con otros países de América Latina, hace que Chile surja claramente como caso exitoso de modelo de desarrollo. Sin embargo, el país se enfrenta a importantes desafíos en temas como innovación, creación de capital humano y capital social<sup>17</sup> que forman parte del círculo virtuoso del desarrollo.

---

<sup>15</sup> Ver LENZ, Rony: Políticas públicas en salud: experiencias y desafíos 1990-2010, en Meller, Patricio (editor): La paradoja aparente. Equidad y eficiencia: resolviendo el dilema. Taurus, Santiago de Chile, 2005. Para mayor detalle del Plan Auge, ver [www.minsal.cl](http://www.minsal.cl).

<sup>17</sup> La valoración actual del capital social se articula fuertemente con la relevancia que ha adquirido en los procesos de innovación. El capital social a diferencia del capital económico no es propiedad del individuo sino de la sociedad, se localiza en la estructura de las relaciones sociales. La definición más extendida es la de Robert Putman al considerar al capital social como las relaciones entre los individuos, que proveen beneficios tanto a sus portadores-cuyas vidas particulares se vuelven más productivas y adquieren más valor al estar conectadas con otras a través de redes y vínculos sociales, como a la sociedad en su conjunto, al ser las redes portadoras de conducta, obligaciones mutuas y reciprocidad.

La desigualdad, el gran talón de Aquiles<sup>18</sup>, generalmente se considera como producto de la desigualdad de oportunidades, transmitida de una generación a otra por medio de la educación, el origen étnico, la posición social y el lugar de nacimiento. La mayoría de los países buscan solución al problema, por medio de medidas que buscan garantizar un nivel aceptable de educación, salud e instrumentos de administración de riesgo para todos los grupos de la población. El bajo crecimiento, por su parte, ha sido considerado como consecuencia de la falta de estabilidad macroeconómica y de problemas estructurales como la escasez de infraestructura, falta de competencia, de recursos financieros y un estado de derecho débil. Sin embargo, al analizar la desigualdad y la competitividad de manera separada se dejan de apreciar partes importantes de la dinámica del bajo crecimiento.

El gran desafío académico y político del siglo XXI será desentrañar la estrecha relación entre ambos. A título de ejemplo, las estructuras desiguales pueden generar ineficiencias en la forma en que funcionan los mercados y otras instituciones, mediante la concentración del control corporativo y las influencias sindicales sobre los mercados financieros, laborales y de productos. También se observan influencias en la selección de políticas y el diseño de instituciones que favorecen esquemas anticompetitivos y de búsqueda de rentas, que son negativos para el crecimiento.

La implicación es que el diseño futuro de políticas públicas para el desarrollo, deberá tomar en cuenta las desigualdades estructurales si se pretende que las reformas relacionadas con el crecimiento tengan éxito. Ello implica avanzar hacia un nuevo concepto en el proceso de construcción del paradigma de desarrollo que integre *innovación social* e innovación tecnológica. La exclusión social es un obstáculo para el desarrollo del capital social y de los procesos de innovación socialmente inclusivos. Esto significa que las políticas sociales también deben de acompañar activamente a las políticas de innovación en el marco de una gobernanza integral. Avanzando otro paso, es preciso insistir en que la capacidad institucional para la innovación de las relaciones sociales –núcleo de los procesos de innovación social- se ve seriamente perjudicada en contextos de frágil cohesión social.

Ello conduce a un debate histórico, el Estado versus el Mercado. El debate de Estado versus mercado creó una falsa disyuntiva en términos de exclusión y anulación de uno por el otro. Retomando las ideas de Polanyi, el mercado por sí sólo no puede garantizar el bienestar. En su libro "*La Gran transformación*" clarifica que una economía basada en los presupuestos de mercado autorregulado no tuvo lugar con anterioridad al surgimiento de la revolución industrial, de modo que hasta entonces nunca había tenido lugar una economía que estuviera controlada por los mercados. El mercado autorregulado supuso una transformación profunda en la economía y en la sociedad y ante el dominio del mercado los diferentes grupos sociales, a finales del siglo XIX y principios del XX, se tuvieron que proteger de los peligros que una situación de esta naturaleza supone. Esto conducirá al surgimiento del intervencionismo keynesiano y el Estado de bienestar, lo que en los países desarrollados se traducirá en un crecimiento económico elevado compatible con una determinada distribución de los beneficios de ese crecimiento.

La cuestión de las alternativas se refiere también a la otra dimensión del Estado, aquella que involucra a la institucionalización de las relaciones de poder en la sociedad. A este respecto es conveniente recordar que todas las experiencias exitosas

---

<sup>18</sup> La desigualdad social en América Latina fue superior en 10 puntos respecto de Asia; en 17,5 puntos respecto de los 30 países de la OCDE y en 20,4 puntos respecto de Europa oriental. En América Latina la desigualdad económica es muy alta el 10 por ciento más rico recibe 48 por ciento del ingreso, y el 10% más pobre, 1.6 (30 veces de diferencia). En los países avanzados las cifras son de 29.1 y 2.5 por ciento ("sólo" 11.64 veces), respectivamente (CEPAL, 2007).

de transformación social y económica desde el Estado están asociadas a la capacidad de determinadas coaliciones de actores, para articular sus demandas y aspiraciones a la institucionalidad estatal. En el fondo, la capacidad del Estado para actuar *sobre y con* la sociedad, y el sentido de sus intervenciones, están estrechamente asociadas al carácter progresivo o retardatario de las motivaciones sociales que orientan su institucionalidad.

Se necesita un nuevo Estado democrático como lo denomina Giddens, "el Estado sin enemigos", que se materializa en escenarios de legitimidad y gobernabilidad, en el que el Estado crea la capacidad de responder institucionalmente a las demandas de la sociedad civil, en lo que se ha denominado "capacidad de gestión del riesgo", que no consiste exclusivamente en la provisión de seguridad social y económica, tal como lo privilegiaba el tradicional Estado del Bienestar, sino que sería multidimensional incluyendo aspectos tecnológicos, científicos, culturales, éticos y de solidaridad.

Esas razones ha conducido a Chile a iniciar un ciclo nuevo, heterodoxo, con mayor énfasis en los temas de equidad social, con mayor presencia del Estado. El desafío es crecer y mejorar los grados de cohesión social, partiendo de la misma base de que los regímenes de bienestar que forman parte constitutiva de estrategias inclusivas de desarrollo. En este sentido, es importante introducir una nueva forma de diseñar las políticas públicas. Y nos podemos preguntar por ejemplo: ¿para mejorar la educación sólo hay que hacer más reformas, destinar más recursos por parte del Estado?. La respuesta es sí, pero también hay que abordar la problemática desde una perspectiva no sólo estructuralista, sino más destinada a fortalecer los incentivos relacionados con el desempeño y la motivación de los actores claves del sistema educativo.

Si Uruguay tiene a la vista la experiencia chilena, lo primero que habría que responder la pregunta: ¿qué es desarrollo?. Y esta es una pregunta abierta que cada sociedad se debe responder. Cuando un país diseña una estrategia está optando por una forma de entender el desarrollo que prioriza unas opciones sobre otras y que, de hecho, define el modelo de desarrollo por el que apuesta. Por lo tanto, analizar la cuestión del desarrollo implica considerar un aspecto fáctico o empírico, un aspecto ético o normativo, la valoración de esas realidades y de su justificación; derechos, y por último, un aspecto propositivo, vías para cambiar esas realidades; acción colectiva. Este es el punto clave del momento actual de la historia de nuestros países. Concitar la voluntad política que permita recuperar el crecimiento económico sobre una base nueva, que concilie dinamismo económico, igualdad social y democracia plena. Tal como señalaba Celso Furtado, el desarrollo es un proceso no solamente de transformación de estructuras sino de invención; es decir, comporta un elemento de intencionalidad, es el resultado de un propósito, de una voluntad política que tiene por meta constituir una sociedad apta para hacerse cargo del proceso del desarrollo.

El desarrollo no es solo un problema técnico, es también político; demanda tiempo y no puede lograrse únicamente con una tecnología codificada y disponible en el mercado. Si bien existen ciertas directrices generales y aspectos acerca del desarrollo seguido por Chile que pueden ser tenidos en consideración por los países de la región. Las respuestas son endógenas y varían significativamente en cada contexto de acuerdo con las configuraciones históricas y políticas. Un cambio del modelo de desarrollo no puede apoyarse en una lógica instrumental. Implica un cambio de actores, de poder, de conocimiento, de habilidades y competencias, y de modelos mentales y valorativos. Esto nos debe conducir a una reflexión sobre la necesidad de pensar el desarrollo desde una perspectiva integral que implique no sólo analizar la lógica de mercado, el rol del Estado, sino también de la sociedad como depositario

active y participe de los beneficios obtenidos. Sin embargo, cada país forja su propio destino.

## **Bibliografía**

Alejandro Foxley (2006), "¿Más mercado o mas estado para América latina?", paper presentado en la *Conferencia Internacional Gobernabilidad en América Latina* organizada por CIEPLAN y la Universidad de Notre Dame; Enero 12-13, 2006, Santiago de Chile.

Attanasio y Székely (2001), "*Poverty and Assets in Latin America*", Editors, Johns Hopkins University Press.

Brunner, José (2002), Hacia una estrategia de desarrollo basada en capacidades tecnológicas. En: Moulian (coord.) *Construir el futuro* vol. 1, aproximaciones a proyectos de país. LOM.

Brunner & Elacqua (2003), *Informe Capital Humano en Chile*. Santiago: La Araucan.

CASEN (2006), *Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica*, Santiago de Chile.

Castells Manuel (2005), *Globalización, Desarrollo y Democracia: Chile en el Contexto Mundial*. Fondo de Cultura Económico, Chile.

Castells, Manuel: (1999), "La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura". Tomo I: *La sociedad red*. Siglo XXI Editores, México.

CEPAL, (2006), *La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad*. Santiago de Chile, CEPAL.

CEPAL, (2003), *Panorama social de América Latina 2002-2003*. Santiago de Chile, CEPAL

Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación CAPCE, (2006), *Informe Final*. Santiago de Chile

Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (CAPRP), (2006). El Derecho a una Vida Digna en la Vejez. Informe Final.

Consejo Asesor de Innovación para la Competitividad (2006). *Hacia una estrategia nacional de innovación para la competitividad*. Informe Final. Santiago de Chile.

DANE (2002), XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda. Santiago de Chile

Ffrench Davis, Ricardo y Stalling, Barbara (editores) (2001), *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973*. Santiago de Chile, LOM-CEPAL.

Fuentes, C. (2007), *Adaptación organizacional sin modernización: el caso de la cancillería chilena*. FLACSO. Informe de investigación, Junio 2007.

Isern, Pedro, *Las Dos Renovaciones de la Izquierda Chilena*. Documento CADAL XIX. Agosto 2004. [http://www.cadal.org/documentos/documento\\_19.pdf](http://www.cadal.org/documentos/documento_19.pdf)

Lall, S. (2004), *“Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Competitiveness”*, G-24 Discussion Paper Series, UN, internet

Larrain, Felipe y Vergara, Rodrigo (2000), *La Transformación Económica de Chile*. Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos. <http://www.cepchile.cl/>

Larrañaga, Osvaldo (2001), “Distribución de ingresos 1958-2001”, en French-Davis, Ricardo ;Stallings, Barbara. *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973*. [Monografías]. Santiago de Chile: LOM.

Larrañaga, Osvaldo (2003), “¿Cómo y dónde viven los chileños? Vivienda y patrimonio”, en varios autores *Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década. Censos 1992-2002*. Santiago de Chile, INE-Cuadernos Bicentenario.

CEPAL, 2006, *La inversión extranjera en América Latina 2006*. Santiago de Chile, CEPAL.

Lenz, Rony (2005), “Políticas públicas en salud: experiencias y desafíos 1990-2010”, en Meller, Patricio (editor): *La paradoja aparente. Equidad y eficiencia: resolviendo el dilema*. Santiago de Chile, TAURUS.

Montecino, S (ed.) (2003), *Revisando Chile: identidades, mitos, historias. Cuadernos Bicentenario*. Santiago de Chile, Presidencia de la República. Editorial Universitaria

Moulian, T. (1997), *Chile, Anatomía de un mito*. Santiago de Chile, ARCIS/LOM.

Muñoz Gomá, Oscar (2007), *El modelo económico de la concertación, 1999-2005. ¿Reformas o cambio?*. Santiago de Chile, Ed. Catalonia. FLASCO.

Ocampo, José Antonio (2005), “Structural dynamics and economic growth in developing countries”, en José Antonio Ocampo (ed.), *Beyond Reforms: Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability*, Stanford University Press/CEPAL, en prensa.

OCDE. (1996), *The Knowledge-Based Economy*, OCDE/GD (96) 102. Disponible en la página web de la OCDE: [www.ocde.org](http://www.ocde.org).

OECD (2001), *The Science, Technology and Industry Scoreboard 2001: Towards a Knowledge-Based Economy*, Disponible en la página web de la OCDE: [www.ocde.org](http://www.ocde.org).

ONU DI, (2005), *Year Book of Industrial Development*, CDR.

Rodrik, D. (2005), Growth strategies, en: Aghion P and Durlauf SN eds., *Handbook of Economic Growth*. Amsterdam, Elsevier: 967.1014.

Rosales, Osvaldo (2006), “Integración regional: propuestas de renovación”, paper presentado en el Seminario Internacional “Paradojas de la integración en América Latina” CEPAL – FLACSO -Fundación Carolina 13-14 de diciembre de 2006

Singh, A. (2006), *“Macroeconomic Volatility: The Policy Lessons from Latin America”*. WP(06/166)

Tironi, Eugenio (2005), *El sueño chileno*. Santiago de Chile, Tauros



Tokman, Andrea (2004), "Education and Economic Growth in Chile," *Working Papers* Santiago de Chile, Central Bank of Chile.

Vega Fernández, Humberto (2007), *En vez de la injusticia. Un camino para el desarrollo de Chile en el siglo XXI*. Santiago de Chile, Debate.